

## COMPETENCIA.

*Competencia suscitada entre el juez de 1ª instancia de Apam y el 2º de lo civil de México, para conocer de la cesion de bienes que hace el C. Rafael Piña y Benitez.*

### PEDIMENTO FISCAL.

El fiscal dice: que cumpliendo con lo prevenido en el auto de 4 del actual, pasa á pedir sobre lo principal en este negocio. Siendo constante de los autos que se tienen á la vista y siéndolo tambien por las diversas ejecutorias que esta sala ha dictado en las varias competencias que el juez de Apam ha promovido al juez 2º de lo civil de México, para conocer en algun modo del juicio que el C. Manuel J. Madrid sigue contra D. Rafael Piña y Benitez; y cuyas ejecutorias se fundaron en que el demandado está domiciliado en esta capital, que en efecto el referido Piña es en realidad vecino de México, y que por lo mismo, con arreglo á la ley 22, tít. 2º, part. 3ª, aquí debe ser demandado, se sigue, que la jurisdicción de México es la competente para conocer de la cesion que de sus bienes pretende hacer el referido Piña: puesto que el concurso voluntario viene á ser un litigio en que el cedente hace de reo y sus acreedores de actor.

Pero si bien es cierto que la jurisdicción de México es en el presente caso la competente, tambien lo es, que estando depositada esa jurisdicción en diversas personas, y teniendo el deudor comun derecho de elegir entre ellas la que mejor le agrada, no sería justo ni conforme á la ley, puesto que nadie puede ser privado de un derecho contra su voluntad, que á D. Rafael Piña se le quitara esa facultad; y á esto equivaldría declarar que el juez 2º de lo civil de México es el competente para conocer de la referida cesion. Ni tampoco puede con-

siderarse decisiva en favor de la jurisdicción de ese juez el que haya conocido y esté pendiente en su juzgado un litigio que contra Piña ha promovido D. Rafael Madrid; esa circunstancia no le ha dado el derecho de prevencion, porque en ese pleito, ni Piña eligió á ese juez, ni el concurso voluntario es para el deudor comun de la misma naturaleza que un asunto contencioso, y porque precisamente uno de los efectos de la declaración de estar bien formado el concurso, es atraer á él los litigios que el deudor comun tenga pendientes en otros juzgados.

Ni tampoco puede decirse que al presentarse Piña ante el juez de Apam, haciendo cesion de bienes, hubo una próroga de jurisdicción, porque primero, para que tenga lugar esa próroga, uno de los requisitos indispensables es: que el juez á quien se próroga tenga de suyo alguna jurisdicción, y por cierto que en el Distrito federal no tiene el juez de Apam ninguna jurisdicción que en la cesion de bienes ó concurso voluntario; no se trata solamente de la utilidad ó provecho del deudor comun, se debe tambien tomar en cuenta el de los acreedores; estos saben ya, que el deudor se presentará al juez de su domicilio; y si se le permitiera á este prorogar la jurisdicción, ó mejor dicho presentarse á cualquiera autoridad, llegaría el caso de que un individuo estando domiciliado en México, teniendo aquí sus bienes, se fuese, perjudicando á sus acreedores, á hacer cesion de bienes á un lugar muy distante, sin mas razon que la de que habia prorogado jurisdicción. Por último: se próroga la jurisdicción cuando un deudor emplazado judicialmente por un juez que le es incompetente, comparece ante él y contesta la demanda sin alegar la falta de jurisdicción, ó lo que es lo mismo, sin oponer la excepcion de declinatoria; pero en el concurso voluntario no hay quien demande ni juez que emplace al reo, y en consecuencia, ni ocasion siquiera para oponer excepciones. Es el deudor

que de buena fé y de su propia y espontánea voluntad se presenta á su juez, ofreciendo con su intervencion sus bienes á sus acreedores para que estos se paguen de sus créditos, previa la graduacion que la autoridad determina. Así pues, D. Rafael Piña no ha podido, en el negocio que hoy se ventila, prorogar jurisdiccion alguna al juez de Apam.

Este juez entre las razones que aduce para defender su jurisdiccion, alega tambien, que el fisco de su Estado es acreedor, y de ahí deduce que tiene fuero atractivo para avocarse y seguir conociendo de la cesion de bienes de D. Rafael Piña; pero este fundamento tampoco es decisivo, porque el raciocinio que con él se forma no es lógico. Dice el juez de Apam que, segun la circular de 19 de Noviembre de 1860, se declaran propios de la jurisdiccion de hacienda todos aquellos litigios en que el erario público esté interesado, ya sea como actor ó como reo; y luego añade: y como en el Distrito de Apam del Estado de Hidalgo yo soy tambien el juez de hacienda, segun lo prevenido en el art. 83 de la ley particular de procedimientos del Estado, y Piña es deudor á ese fisco, resulta, que yo debo avocarme el conocimiento de la cesion de bienes intentada por Piña. Al hacer tal argumento, se olvida el juez de Apam de que la circular á que se refiere, es una disposicion que se dirige únicamente á los asuntos de hacienda de la federacion y nunca puede tener aplicacion respecto de los negocios hacendarios de un Estado particular; puesto que estos, segun el art. de la Constitucion federal, son libres y soberanos en todo lo que atañe á su organizacion y régimen interior, y precisamente su hacienda ó erario es cosa muy particularmente suya y de la que en manera alguna puede ocuparse una disposicion dictada por el gobierno de la Union. Así como tampoco y en fuerza de ese mismo art. constitucional, ni al Distrito ni á los demas Estados, les pueden nunca obligar las disposi-

ciones y leyes particulares que uno de ellos se dé á sí mismo.

Por todo lo expuesto el fiscal concluye con las siguientes proposiciones que sujeta á la deliberacion de esta respetable sala:

Primera; Se declara que los tribunales de México, son los competentes para conocer de la cesion de bienes que D. Rafael Piña y Benitez pretende hacer en favor de sus acreedores.

Segunda; Se reserva la facultad de elegir entre los jueces de esta capital el mejor que le convenga.

México, Octubre seis de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Altamirano.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la competencia promovida por el juez 2º de lo civil de este capital al de 1ª instancia de Apam para conocer de la cesion de bienes hecha ante esta por el C. Rafael Piña y Benitez; lo alegado por las partes é informado por los jueces en apoyo de la respectiva jurisdiccion; lo pedido por el C. fiscal; oido lo alegado ante esta 1ª sala al tiempo de la vista por el C. Lic. José Linares en favor de la jurisdiccion del juzgado 2º de lo civil de esta ciudad, y teniendo en consideracion todo lo que convino.

Considerando: que la cesion de bienes hecha por Piña solo está solicitada, pero no admitida ni desechada hasta hoy por sus acreedores: que el deudor comun que hace cesion de bienes, debe presentarse ante el juez de su domicilio, como lo enseña Salgado en su laberinto de acreedores, en los mismos lugares citados por Piña: que si hay varios jueces de una misma clase en el domicilio del deudor comun, puede elegirse entre ellos el que mejor le parezca: que aunque Piña ha pretendido probar con los cer-

tificados que obran á fojas 15 y 16 del cuaderno de competencia formado en el juzgado de Apam, que está domiciliado en ese lugar, esos certificados expedidos sin citacion de parte no pueden hacer prueba plena, ya por esa circunstancia, ya por que los hechos de que Piña figure en primer lugar en el padron general de la 7ª seccion de la municipalidad de Apam, mandado formar en Enero del presente año para saber el censo actual del municipio, de que haya formado parte de las mesas electorales desempeñando uno de los cargos conferidos en ellos, y de que pague contribuciones predial y personal en la administracion de rentas del Distrito de Apam, á lo sumo probarán vecindad y que se tienen algunos bienes en ese Distrito, y ya por que en contrario, en los diversos negocios judiciales que Piña ha tenido en esta ciudad, y que por razon de competencia han venido á esta sala, aparece que en esta ciudad ha sido ejecutado; que en ella se ha presentado á seguir esos negocios; que en su casa, en la misma ciudad, se le han dejado instructivos etc, lo que prueba que México es el lugar de su domicilio. Considerando ademas: que las diversas competencias promovidas por causa de Piña entre los mismos juzgados, todas se han decidido por esta sala en favor del juzgado 2º de lo civil de esta ciudad, y que insistir una vez Piña en sustraerse de la jurisdiccion de los jueces de México, indica una temeridad marcada en esa sustraccion destituida de fundamento legal; con arreglo á las doctrinas de los autores citados por el mismo Piña y á lo dispuesto en las leyes 32 tit. 2º part. 3ª y 4ª tit. 3º de la misma partida, se declara:

Primero; de conformidad con lo pedido por el C. fiscal, que los tribunales ordinarios de México son competentes para conocer de la cesion de bienes que D. Rafael Piña y Benítez pretende hacer en favor de sus acreedores, reservándole la facultad de elegir entre ellos el que mejor le convenga.

Segundo; se condena en todas las costas

causadas en esta competencia al C. Rafael Piña y Benítez.

Tercero; remítanse las actuaciones al juzgado 2º de lo civil de esta ciudad, con copia certificada de esta sentencia; de la que se remitirá copia igual al juzgado de 1ª instancia de Apam, para los efectos consiguientes.

Cuarto; hágase saber y archívese el toca.

Así por unanimidad de votos la mandaron los CC. Presidente y Magistrados de la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Oyarzun.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Noviembre Primero de mil ochocientos setenta y uno.—*H. Guzman.*

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan por D. Encarnacion Guzman de Gamboa, contra una sentencia del juez 3º de paz de Merida, por creer que ella viola, las garantías que otorgan los artículos 14 y 126 de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Por mas que en su extenso informe ha tratado de demostrar el C. Juez de paz 3º de esta capital la constitucionalidad de sus actos que motivan el presente juicio de amparo, y la improcedencia con que ha sido intentado contra lo que previene el artículo 8º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el fiscal no puede menos que convenirse, en vista de los documentos justificativos de dicho informe, de que el amparo es precedente, porque no se trata de un negocio propiamente judicial, en el sentido jurí-